

ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO
JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHÃES
JOSIRENE CANDIDO LONDERO
(Organizadores)

**DIREITO E SOCIEDADE NA AMÉRICA
LATINA DO SÉCULO XXI**

**Pelotas
Editora e Gráfica Universitária
2009**

CAMPO POPULAR Y CONSENSO SOCIAL PROGRESISTA EN EL CONO SUR: tendencias y escenarios en un contexto de crisis

Alfredo Falero

1. Aproximación conceptual

El trabajo se inscribe en un intento de generar lecturas transversales de agentes del campo popular en América Latina (Falero, 2008) y permitir comparaciones entre distintos arcos de movimientos y organizaciones y espacios de lucha. En este caso, se propone para ello partir de la siguiente constatación teórica: existe un problema de herramientas conceptuales disponibles para aproximarse al estudio del conjunto de organizaciones y movimientos sociales que expresan en una sociedad una variedad de intereses y demandas vinculadas a distintos derechos sociales en determinada coyuntura sociohistórica. Frecuentemente, se alude al conjunto como parte de la "sociedad civil", pero ésta es una noción más amplia – porque puede incluir a la iglesia, organizaciones empresariales, todo tipo de organizaciones no gubernamentales, etc. – por tanto difusa.

También debe admitirse que el propio concepto de "movimiento social", útil para el contexto europeo, puede amputar realidades sociales cuando se traslada a la realidad latinoamericana mecánicamente. Una realidad diversa, heterogénea, donde se articulan viejas y nuevas relaciones de producción, formas de dominación tradicionales y modernas, pero una realidad donde también pueden desarrollarse con mayor potencialidad redes sociales.

En la necesidad de observar el conjunto de organizaciones y movimientos que no son coincidentes entre si pero son proclives a la construcción y expansión de derechos, la categoría de campo de Pierre Bourdieu puede ser útil para tal efecto y podría hablarse en consecuencia de "campo popular". Al tratar a un aglutinamiento de esta naturaleza como campo, surgen de inmediato problemas conceptuales variados. Lo que sigue, pues es un intento de apropiarse de una herramienta conceptual y de alguna manera disparar la reflexión.

En primer lugar, hay que tener presente las características generales de todo campo. Es decir, la sociedad para el conocido sociólogo, es un conjunto de campos de fuerzas, de configuraciones de relaciones sociales que han ido cobrando autonomía y que definen modos de dominación específicos. El límite de un campo, es el límite de sus efectos, esto es, un agente o una institución hacen parte del campo en la medida en que sufren efectos de ese espacio social o los producen sobre el mismo¹⁶⁷. Esa influencia que pesa sobre los participantes del campo la denomina “illusio” y procura transmitir la idea de “complicidad” con las estructuras objetivas del campo, de creer que el juego merece la pena (Bourdieu, 2007).

El campo es un espacio de luchas por la apropiación de los recursos propios de ese espacio social, lo cual sugiere tensiones entre los agentes participantes por su apropiación y por tanto por mejorar la posición social. Y aquí encontramos un primer desafío, pues si bien se ha trabajado con el concepto para examinar lo político, la televisión, la universidad, etc., para lo que aquí se propone aproximar, no se registran claros antecedentes. Quizás porque es difícil ver un espacio de tensiones y conflictos entre organizaciones y movimientos sociales cuando otras tensiones aparecen con más claridad. No obstante, es claro que no es un espacio de acuerdos inmediatos, ni mucho menos y que se observan distintas estrategias, posturas filosóficas y políticas y dinámicas en la lucha general por promover y conseguir determinados derechos.

Es más, considerar estas distintas posiciones y conflictos puede resultar clave cuando se trata de observar las articulaciones con el campo político en el actual contexto del cono sur, donde el escenario no es el de la década del noventa con gobiernos caracterizables fácilmente como “neoliberales”. Esto lleva a un segundo desafío y es observar las relaciones e interdependencias que se establecen entre los distintos campos. No existe un orden determinado de importancia entre los distintos campos, esto puede variar. De igual modo puede variar la influencia de un campo sobre el otro.

Sin embargo, y esta es una tensión teórica, sabemos que la lógica económica, como ninguna otra, es ampliamente transversal con relación al conjunto de los campos de actividad. Su capacidad de influir sobre otros campos no es menor. En las sociedades del cono sur, sostendremos que se

¹⁶⁷ Como es conocido, existe una amplia bibliografía disponible de Bourdieu. Por razones de límites de este trabajo, puede mencionarse Bourdieu, 2005. Por iguales razones debe señalarse que la caracterización de “campo popular” exigiría un desarrollo que tampoco es posible realizar aquí y más bien se apunta a una invitación a desarrollar esa línea.

ha tendido a generar un consenso liberal “progresista” y esto no es fácil de procesar por los agentes del campo popular.

Pero para observar esto – y hacemos un paréntesis en este segundo desafío teórico- es preciso introducir un concepto ajeno a Bourdieu, más tributario del marxismo y con inspiración en la escuela regulacionista.¹⁶⁸ Se utilizará la noción de patrón social de acumulación para dar la idea de grandes marcos de acción que especifican dinámicas centrales de conflicto social y que pueden potenciar o limitar determinadas luchas sociales.

Para ello se considera la necesidad de no quedar atrapado en la idea de que todo se reduce a mejores o peores instituciones que regulan la acumulación de capital en un espacio-tiempo “nacional”. En tanto las posiciones de poder se constituyen no solamente por lógicas “internas” sino por específicas articulaciones que se definen en el plano regional y global (en este último caso recordando lo que significa la división global del trabajo actual), más bien se procura hacer notar la idea de un patrón que cruza fronteras y que contribuye a delimitar categorías de percepción y sistemas de clasificación en las que se expresan las luchas sociales.

En nuestro caso, es preciso tener en cuenta, por ejemplo, los procesos de “desindustrialización”, de mayor presencia de inserciones laborales informales y precarias o directamente de falta de inserción laboral, los espacios extralaborales de demandas y el propio territorio, ya que pasan a ser mucho más constitutivos de subjetividad colectiva que antes. Piénsese en los casos de Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) en Uruguay, en el Movimiento Sin Tierra o en el de los Sin Techo en Brasil, en el caso del espacio piquetero (ese conjunto de organizaciones de desocupados que llegó a convocar unas cien mil personas en plena crisis en Argentina), o el caso de las protestas de los mapuches por el territorio en Chile. Respecto al caso de los piqueteros, por ejemplo, recuérdese que el corte de ruta dio cuenta en su momento de un nuevo espacio social de resistencia y de nuevas formas de subjetividad producidas en un contexto de desempleo importante. Una forma de lucha que traspasó luego el campo popular para ser captado como instrumento de lucha por sectores rurales del campo económico.

¹⁶⁸ Se es consciente que no necesariamente hay compatibilidad inmediata entre las perspectivas mencionadas, sin embargo a efectos de este artículo es imposible entrar en consideraciones teórico – epistemológicas. Para un desarrollo mayor del esqueleto conceptual, remitimos a Falero, 2008b.

Un tercer desafío, es considerar las particularidades de campo específico. En nuestro caso, se destaca en primer lugar que se trata de un espacio social con bajo nivel de institucionalización. En segundo lugar, se trata de un espacio donde la potencialidad de recursos y capital acumulado, es bastante diferente de otros casos. Es un espacio, donde pesa mucho, la capacidad de construir formas subjetivas de apropiarse de la realidad. Y en función de todo lo anterior, en cuarto lugar, potencialmente puede presentarse como agrupando a un conjunto alto de agentes integrantes del campo (y esto no necesariamente ocurre en el campo político por ejemplo).

Es clave la importancia de visualizar el campo popular como un espacio potencial de producciones simbólicas alternativas a las lógicas dominantes. Frente a la naturalización de formas de ver la sociedad que emanan de agentes económicos y políticos –y que son canalizadas y construidas por el campo de la comunicación- el campo popular tiene más allá de sus tensiones, de sus conflictos, la potencialidad de disputar sentidos alternativos de sociedad.

Y de hecho, más allá de las diferencias entre países, más allá de frenos o bloqueos de los diferentes agentes sociales, no pueden explicarse los recambios de los últimos años en el campo político en América Latina, sin las expresiones de protesta, sin las demandas de derechos de todo tipo que movimientos y organizaciones del campo popular vienen construyendo, particularmente, desde la década del noventa.

2. Gobiernos “progresistas” y patron social de acumulación

¿Cuál es la capacidad de los gobiernos caracterizados como progresistas de promover efectivamente cambios a nivel económico? ¿Cuál es la intención de hacerlo? ¿Se trata de una cuestión de tiempo en función de estructuras de poder heredadas de la década del noventa, o por el contrario ni siquiera se trata ya de pensar en una agenda de esa naturaleza? ¿Acaso los procesos globales actuales impiden generar dinámicas de transformación importantes? ¿O en realidad –y considerando la crisis global- ya está en curso un nuevo proyecto que puede calificarse de "neodesarrollista"? ¿Cómo es posible construir sentidos alternativos de sociedad en este contexto?. Estas son algunas de las preguntas posibles en relación con nuestro objeto de estudio y que fracturan la visión del campo popular.

Ahora bien, asumiendo que más allá de límites, de intereses, de oportunidades, los agentes políticos tienen la capacidad de impulsar cursos de acción, puede considerarse que el llamado “progresismo” no promovió

efectivamente transformar el patrón social de acumulación heredado. De los cuatro países que consideramos, fue en Argentina donde pueden observarse mayores acciones por modificar el mismo. No se trata de mera cuestión de retórica como parece desprenderse del análisis de Svampa cuando examina la pérdida de efervescencia social y las resistencia del período 2003 – 2007 (2008).

En Argentina luego de la crisis y del ciclo de protestas que tuvo su cima en el año 2001, aparecen cambios importantes comparativamente con los otros tres casos. A partir del año 2003: se negoció la salida del "default" más grande de la historia, se produjo una reestructuración de la deuda pública (con una negociación que llegó a generar confrontaciones con el FMI) y el sistema productivo comenzó aemerger y se expandió el empleo (incluso con demanda de empleos calificados). Las tasas de crecimiento anuales del PBI estuvieron en el orden del 9 % y más, y hay algunos espacios donde se observa que se trató de avanzar, como en la nacionalización de empresas públicas que fueron privatizadas. Es decir, la demanda de "orden" frente a la situación anterior, solo pudo emerger considerando transformaciones que permitieron generar un proceso de acumulación (Falero, 2008b).

Sin embargo, es claro que la estructura exportadora se sigue concentrando casi exclusivamente en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Las manufacturas de tecnología intermedia y alta no llegan al 20 % de las exportaciones totales¹⁶⁹. Las estructuras de poder económico anteriores se mantienen. Pero es igualmente cierto que se dio una expansión de la economía sobre un manejo más heterodoxo de la misma, con un giro hacia una mayor regulación de las instituciones estatales en el juego de los actores económicos. Si este crecimiento continúa y se expande sobre nuevas bases de producción, es toda una discusión.

En Brasil, se han distinguido tres fases respecto a la década del noventa en adelante. Una fase turbulenta de implantación del "neoliberalismo" es la de Collor de Mello, una fase más de ampliación y consolidación es la del primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso y una fase de consolidación de la hegemonía del capital financiero es la del segundo gobierno de Cardoso y el gobierno de Lula (Filgueiras, 2006). Con el gobierno del presidente Lula, se da una expansión –como en los otros casos analizados - arrastrada por una mayor demanda global que permitió

¹⁶⁹ Véase informe de Fernando Krakowiak "Modelo para armar" en CASH de PAGINA 12, Buenos Aires, 09.07.06.

disimular las vulnerabilidades del patrón social de acumulación heredado y reproducido.

De hecho en Brasil, se mantiene una hegemonía del gran capital financiero nacional e internacional. Como ha sido apuntado por múltiples análisis, en este caso el sector financiero siguió incrementando las ganancias en el período del gobierno del PT en función de la política monetaria y cambiaria¹⁷⁰. Se ha concluido asimismo, que la operación política del gobierno de Lula fue promover el ascenso del gran empresariado industrial y agrario volcado a la exportación, pero sin quebrar esa hegemonía. Naturalmente estos sectores negociaron la política sobre tasas de interés y nivel de apertura, pero sin discutir la hegemonía apuntada.

En Uruguay, nunca se discutió la renegociación de la deuda ni grandes parámetros de reproducción del patrón social de acumulación. El proceso de privatización en la acepción de intención de venta total de activos, se ha detenido, pero la participación del capital privado en espacios reservados antes al Estado se ha mantenido y estimulado. En este sentido, cabe recordar los casos planteados con el sistema bancario y la re-privatización del "Nuevo Banco Comercial", las asociación de la línea área PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea), con el 75 % del paquete accionario en manos privadas), el ingreso de una nueva transnacional en el sector telecomunicaciones, entre otros.

Un punto central que marca el mantenimiento de la política económica respecto al período político anterior, es la insistencia en la apertura de mercados y en la capacidad de atraer inversión extranjera directa como lógica salvadora. Esto se traduce en la firma de tratados de protección de inversiones y en la casi –finalmente detenida- firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, propuesta naturalmente apoyada por las cámaras empresariales. Nada indica que no se siga asistiendo a la transnacionalización de la economía.

En cuanto a la importancia del sector agropecuario dentro del espectro de agentes económicos, se mantiene en una de las posiciones dominantes. Tampoco se observan variaciones sustanciales en la posición del sector financiero, ni la disposición del Estado a modificar tal posición, más allá de algunas regulaciones parciales. También aquí puede decirse que el nuevo

¹⁷⁰ Véase por ejemplo INFOLATAM (Río de Janeiro, 17.08.09). http://www.infolatam.com/entrada/brasil_los_bancos_acaparan_la_mayoria_de-15497.html. También puede verse el informe de KP&M Consultores: <http://www.kpym.com.ar/docs/internacional/El%20virus%20transmisor%20de%20penurias.pdf>

gobierno amplía y da nueva dimensión al proceso iniciado con el presidente Batlle posterior a la devaluación, es decir al año 2002 (Falero, 2008b).

En el caso de Chile, las empresas extranjeras han seguido aumentado sus ganancias en forma exponencial, particularmente aquellas ligadas al cobre. Puede decirse que la industria pesquera está agotada por la sobreexplotación del recurso pesquero, lo mismo la celulosa que también tiene un límite territorial. Considerando la propiedad de los medios de producción; la propiedad de los recursos naturales y el grado de control monopólico de las grandes empresas (como fundamenta reiteradamente el economista Orlando Caputo¹⁷¹), la continuidad del patrón social de acumulación bajo administración de Bachelet no deja lugar a dudas.

Quizás más que en ningún otro caso, en Chile los empresarios no solo promovieron e impulsaron los procesos de reformas, sino que se constituyeron en actor privilegiado del modelo. De forma individual o colectiva, apoyaron las estrategias de política económica de los gobiernos y cumplieron funciones de asesoría institucional (Flores, 2006). En el país del cono sur donde un modelo alternativo logró comenzar a caminar en los setenta, es, no por casualidad, el país donde se procesó la mayor transformación del tejido social de resistencias.

Considerando los cuatro casos y con una visión panorámica y transversal que vaya más allá de especificidades nacionales, puede decirse que la estructura social caracterizada por una distribución altamente concentrada y desigual de la renta (particularmente en Brasil) no fue modificada pese a la expansión económica. Igualmente debe señalarse que la variación que es significativa registrar con las nuevas gestiones, es la regulación general de las instituciones estatales, es decir, como la gestión de lo público ha experimentado notorios cambios. Si desregulación estaba asociada a apertura y a libre juego del mercado, esto ya no es así. Existe una formulación matizada global de la visión liberal donde aparece una revalorización del papel de las instituciones para establecer reglas de juego de la "apertura" y el "mercado". Esto no implica en absoluto una confrontación con las agencias multilaterales (Falero, 2008b).

Es posible postular el pasaje del "neoliberalismo" a un "neoinstitucionalismo", entendiendo por esto –y más allá de las variantes conceptuales y matices sugeridas con este rótulo- una nueva relación entre campo económico e "instituciones" estatales. La consigna podría decir:

¹⁷¹ Véase por ejemplo: http://www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Pub_OCaputo/

después de todo, y particularmente considerando ahora el contexto de crisis, no está mal que el Estado sea algo más que juez y gendarme. Es necesario, siguiendo la fundamentación neoinstitucionalista, que intervenga y pueda establecer marcos de contención subjetiva general, proveer visión de largo plazo económico en un contexto de disolución de vínculos de confianza social general.

También podría decirse desde esta perspectiva: es bueno asimismo que el Estado trate de recuperar una seguridad de gratificación postergada de quien invierte, ya que eso de trabajar duro y esperar está en crisis en toda la sociedad, como marcaba Sennett hace algunos años (2000) o proveer autoridad para generar obediencia voluntaria (mucho más eficaz que la forzada) lo cual requiere alguien que se haga responsable por el manejo de lo público. Finalmente, para no extenderse más en el punto, el Estado es visto como imprescindible para la intervención en contextos complejos de tensiones inevitables.

En suma, el nuevo consenso (pos consenso de Washington) asigna un papel diferente al Estado en comparación al asumido por el neoliberalismo de la década del noventa, pero partiendo, manteniendo y tratando de expandir el avance de la mercantilización de las relaciones sociales que se presenta como inevitable y mejor para toda la sociedad. De hecho, instituciones estatales creíbles y más sólidas (que en la década del noventa) son planteadas como imprescindibles para construir sentidos de sociedad asociados con la extensión y profundización de relaciones capitalistas y donde las necesidades sociales puedan pensarse y resolverse en ese marco limitado.

3. Bases para una radiografía del consenso económico progresista

Las bases actuales de construcción de consenso provenientes del campo económico son varias y suponen la transformación de la forma Estado, es decir que van más allá de gobiernos en particular. Esto quiere decir que la construcción de sentidos alternativos de sociedad por parte del campo popular, se enfrenta a la necesidad de dinamitar simbólicamente tales bases. Entre otros, pueden identificarse los siguientes cuatro ejes de coacción simbólica:

3.1 la coaccion derivada de mantener la estabilidad o el "clima de negocios"

Permanentemente se trata de marcar lo beneficioso de mantener un curso de acción basado en la promoción de un "clima de negocios" lo cual supone apertura comercial o dar condiciones comparativamente mayores que otros a la inversión extranjera. Este se constituye en una pieza central de la orientación general tendiente a reproducir la "confianza sistémica" pos crisis regional pero en un contexto de crisis global. También supone competencias entre los cuatro países analizados por atraer inversiones.

Para el mantenimiento del consenso económico, no puede haber modificaciones sustantivas en la dirección económica que pongan en riesgo la "estabilidad", lo cual da cuenta también del papel del campo político en tal sentido. De esta manera, los conflictos sociales y políticos sólo son "legítimos" –en el marco de esta lógica- es decir, en cuanto no se perciba que perjudiquen la "estabilidad" económica. Esto, naturalmente, no quiere decir un alineamiento inmediato entre partidos políticos y empresarios; y menos considerarlos como una abstracción, sino como agentes de un campo que compiten por el poder sobre el poder del Estado (Bourdieu, 2001),

3.2 la coaccion derivada del argumento de lo técnico como separado de intereses específicos

En Uruguay, el caso recurrente en que fue utilizado este argumento en el período político abierto en el 2005, con la asunción del Frente Amplio, ha sido el debate en torno a la inserción internacional, específicamente sobre la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Durante el 2006, desde el Ministro de Economía se reiteraba frecuentemente la necesidad de "desideologizar" un tema que se trataba de presentar como puramente técnico comercial.

Este punto se relaciona con la construcción de una perspectiva tecnocrática de la gestión, de manejar las medidas económicas como cuestión puramente técnica. Algo que por cierto, no es exclusivo del Uruguay. Como demostró hace años James O'connor (1987), la política económica se desarrolló históricamente –y hoy no es la excepción- dentro de líneas rectoras cambiantes en función del conflicto y de la composición de clase. Evidentemente hay intereses beneficiados y perjudicados aunque toda política económica debe presentarse como animada por proteger a todos y por tanto como "técnica".

3.3 la coaccion de retroceder en el transito de un camino de “madurez” o “responsabilidad”

La búsqueda del equilibrio fiscal se presenta como ligado al desafío de la opción responsable, como cumplimiento estricto de reglas de juego para lograr la "estabilidad macroeconómica". Un equilibrio que genera una restricción presupuestal importante para las demandas de los distintos sectores de la sociedad y que genera conflictos y descrédito, particularmente cuando se trata de sectores históricamente postergados.

En tanto la necesidad de mantener estos equilibrios aparece como una cuestión de sensatez, de madurez y no de agendas con agencias multilaterales como el FMI o el BM, se logra el recurso simbólico de mostrar a los actores que realizan demandas como precisamente lo contrario: inmaduros, poco realistas frente a la coyuntura. También permite colocar a los economistas que desafian la ortodoxia económica como poco serios frente al camino elegido. Sabemos que en la sociedad algunas palabras pueden generar automatismos, adhesiones irreflexivas y cambiar la visión del mundo social. Es decir es una seducción que no busca llegar a la mente racional sino a pulsar otros mecanismos de los sentidos, de las emociones. Y esto ocurre cuando se reitera la necesidad de ser pragmático, de apelar a lo maduro y lo serio, todo lo cual deja a cualquier otro discurso económico a representar lo contrario: lo especulativo, lo inmaduro, lo irresponsable.

3.4 La coaccion de las herencias de gobiernos anteriores y la responsabilidad del gradualismo

Ambos justifican un curso de acción económica. Por un lado se levanta cierta ambigüedad sobre cursos de acción posibles en función de políticas generales heredadas, como si técnicamente no fuera posible cambiarlas. Por ejemplo el cultivar relaciones estrechas con Estados Unidos particularmente en el caso de Brasil, Chile y Uruguay. Por otro, consagra decisiones tomadas en las nuevas administraciones como materia juzgada, sobre lo cual solo cabe mirar al futuro, hechos consumados que hacen posible otros hechos consumados y así sucesivamente.

No se pretende apuntar aquí a que los legados de gobiernos anteriores no pesen y que por tanto, como todo gobierno, no trate de adjudicar responsabilidades a equipos que le precedieron. Pero también pueden servir como recurso simbólico. En el mismo sentido, el gradualismo del cambio se hace necesario. Es decir, la idea es que aún no se ven cambios estructurales

por una cuestión de tiempo, pero no de enfoque. Con la idea de gradualismo se tiende a limar los aspectos más agresivos de propuestas alternativas y favorecer la idea de la madurez de lo pausado, lo sereno, lo reflexivo.

4. Las tensiones entre campo político y campo popular

Atendiendo a elementos rápidamente expuestos en el comienzo de este trabajo, las gestiones identificadas como progresistas de los países estudiados debe examinarse también a la luz de las lógicas que operan en el campo político. De esta manera, el Frente Amplio, el PT, el partido Socialista chileno, el sector kirchnerista del Partido Justicialista son agentes del campo político que están en primer lugar en competencia con otros agentes del campo, en un espacio con determinadas reglas y que reproduce fuerzas desiguales en tensión.

Si hay una diferencia sustantiva entre expectativas y resultados en el electorado de apoyo, la fuerza política apela a los recursos que dispone para construir consensos, por ejemplo el prestigio acumulado, un bien que se pone en juego y se consume y por tanto es central reproducirlo. Forma parte del capital político que es una forma de capital simbólico. Otro recurso sustantivo es la capacidad de comunicar logros y el “espectáculo”, se vuelve uno de los recursos del campo.

Lo que puede denominarse como domesticación de las expectativas, es una cuestión de sentido práctico dentro del campo político. Pues lo que está en juego hoy desde los gobiernos analizados no es generar una nueva relación de fuerzas para navegar hacia la construcción de una nueva hegemonía, en el sentido clásico de Gramsci (1985). La cuestión básica gira en torno a la capacidad de diferenciarse del resto del campo político sin afectar sustancialmente las relaciones con los otros campos sociales. Esta búsqueda de diferenciación para una fuerza de izquierda hoy se puede basar en aspectos de gestión de lo público, pero bastante menos en impulsar proyectos alternativos de sociedad. No obstante, muchos conflictos por posiciones en el campo político se hacen pasar como conflictos por proyectos de sociedad. El campo político se ha vuelto extremadamente autorreferencial y aquí la importancia del campo popular: su potencialidad de cuestionar esa autorreferencialidad y de mostrar sus limitaciones en la construcción de derechos.

Se han generado distintos mecanismos para reproducir las bases del consenso económico antes expuesto y desactivar protestas. Uno de ellos se da a través de formas asistencialistas con los sectores más vulnerables. En

tal sentido, y sin negar la complejidad de revertir la enorme fractura del tejido social, ¿hasta donde los gobiernos progresistas no generan una forma actualizada de clientela de apoyo aunque distinta a la anterior, que evidentemente construía mediaciones sociales más oscuras entre tejido social y campo político? También la pregunta puede ser formulada en términos de funcionalidad al capital, ¿hasta donde no se tiende meramente a la constitución de un enorme “ejército permanente de reserva” de fuerza de trabajo, por emplear la categoría de Marx?

Una segunda forma de domesticación de expectativas, pero esta vez vinculada a sectores medios urbanos, se basa en el consumo. Si se consideran los casos de Argentina 2001 y en menor medida Uruguay 2002, puede decirse que la rebeldía de estos sectores y su asociación en la protesta surge cuando las condiciones que permiten la reproducción de un nivel de vida consumista son bruscamente limitadas. Una vez que se reestablecen los mecanismos sistémicos para su reproducción como clase, la subjetividad de rebeldía se disuelve. Es un disciplinamiento hedonista que depende de la reproducción del patrón social de acumulación.

En cuanto a disidencias en los sectores de las fuerzas políticas en los gobiernos, los procedimientos son comunes a cualquier partido: disciplinamiento mediante cooptación, construcción implícita del mensaje "solo los dóciles alcanzan posiciones claves" y marginación de la disidencia o funcionalización de la misma. En este último sentido, en Brasil, el PT como tal convocó a movilizaciones durante la visita de Bush a ese país, seguramente gestionando la disidencia del ala izquierda que quiere conservar.

En cuanto a las fuerzas del campo popular que mantienen diálogo con la fuerza política que está en el gobierno –particularmente los movimientos sindicales- tanto en Argentina (con la CGT), como en Brasil (con la CUT) o en Uruguay (con el PIT-CNT), en general no pueden dejar de evaluar contradictoriamente la coyuntura: gobiernos que se acercan más que otros a sus posturas históricas, pero al mismo tiempo expectativas limitadas en cuanto a la canalización de sus demandas y proyectos sociopolíticos (esto último particularmente en el caso de Brasil y Uruguay).

Entre los mecanismos que desestimulan la posibilidad de mayor ruptura entre campo popular y gobierno pueden caracterizarse, entre otros, los siguientes: evaluación de pérdida de recursos, mantenimiento de canales de diálogo y administración de posiciones en el campo político. Respecto al primero, por ejemplo, un agente puede observar que un despliegue importante para impulsar sus demandas le puede hacer perder recursos

(credibilidad social como agente, por ejemplo), más que ganar en el juego estratégico general. La tendencia es entonces a moderar sus críticas aunque no a perderlas. Así, las centrales sindicales de Uruguay y Brasil tienden a oscilar entre la postura discursiva crítica al gobierno y un accionar muy prudente respecto al mismo.

Respecto al segundo mecanismo, hay que tener en cuenta que si bien el gobierno no atiende la demanda en su totalidad y proyección, igualmente puede mantener canales de diálogo administrando sus recursos en dosis pequeñas pero que van en el sentido de los objetivos de la organización. En Uruguay, FUCVAM no logró que el gobierno emprendiera un apoyo sustantivo a la vivienda por ayuda mutua, pero paralelamente logró de la Intendencia de Montevideo una cartera de tierras que descomprimió algunas protestas. El movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil no pudo lograr que se desarrollara un proyecto de reforma agraria y sostiene que el gobierno privilegia el agronegocio, pero igualmente existe otro relacionamiento con el gobierno federal en relación al período anterior, que ha posibilitado la reproducción cotidiana del movimiento.

Respecto al tercer mecanismo, debe considerarse que también pesa en una organización popular que agentes individuales de la misma actúen indistintamente en uno y otro espacio social a la vez (campo de organizaciones populares y campo político). Aquí puede pesar el capital social acumulado que la propia organización no quiere perder o directamente, a nivel individual, la posibilidad de carreras existentes o potenciales dentro del campo político. Es decir, una forma de cooptación. En estos casos, la lógica pragmática del campo político puede seguir predominando como lógica central y desestimular indirectamente posicionamientos más críticos de las organizaciones.

Recuérdese que un partido en el gobierno siempre tiene más recursos que un agente del campo popular de retener agentes individuales de peso político real o potencial, mediante prebendas materiales o simbólicas o una mezcla de ambas. Y en los cuatro países analizados, el campo político ha retenido un poder importante.

5. Las estrias del campo popular en el nuevo contexto

En la tensión entre la necesidad de las posiciones dominantes en el campo político de domesticar la perspectiva de algunos sectores sociales que aún sostienen la alternativa de otro proyecto de sociedad y de canalizar las demandas de sectores empresariales corporativos que proyectan sus

propios intereses como de toda la sociedad, se desarrollan acciones colectivas que, como argumentaba Melucci (2001), tienden a redefinir las fronteras del sistema. En el campo popular se ubican diferentes organizaciones y movimientos sociales que llevan adelante tales acciones.

Es un hecho que las demandas sindicales se ampliaron en un contexto donde nuevas disposiciones ampararon la actividad sindical (como ley de fueros o despenalización en la posibilidad de ocupación de los lugares de trabajo en el caso uruguayo). Considerando las diversas posiciones del movimiento sindical que evalúan en forma distinta al gobierno, en su conjunto se observa su oscilación.

Desde las posiciones de alineamiento del movimiento sindical con el gobierno, se tiende a sostener que los cuestionamientos de otros sectores tienen más que ver con viejas consignas que con posibilidades reales. Desde las posiciones de distancia, se tiende a considerar que la asunción de un gobierno más alineado con demandas históricas, no necesariamente debe hacer olvidar la necesidad de seguir sosteniendo alternativas de sociedad y la autonomía sindical. Desde las posiciones de ruptura más contundente del movimiento sindical, en general se tiende, a identificar un problema de intereses personales que sepultaron la capacidad del movimiento de presionar en reclamos históricos. Es de suponer que en la continuidad de un escenario de gobiernos caracterizados como progresistas y en un contexto de crisis global que bajan los recursos disponibles en función de la baja de las tasas de crecimiento, la separación de posiciones y la tensión en la producción de significados se volverá más nítida dentro del campo popular.

Sabemos que el exceso de información provoca dificultad en el proceso de construcción de las orientaciones y en la determinación de las oportunidades de la acción (Revilla, 1994; Melucci, 2001). Razón por la cual, en tal contexto, los agentes del campo popular se enfrentarán cada vez más a mayor complejidad por lo que deberán procesar cada vez mayor información para actuar.

La “competencia” en el campo popular se ha manifestado por ejemplo en Argentina entre posiciones piqueteras afines o distantes con el gobierno. Pero aún en contextos de tradición de “unidad” sobre las diferencias, como en el caso uruguayo, se observan tensiones crecientes en el campo popular. En tal sentido, la visita del presidente George Bush, cristalizó por primera vez una línea de separación nítida. Corresponde detenerse en este caso para exemplificar. El 9 de marzo del 2007, por un lado, se dio la convocatoria de la llamada “Coordinación Antiimperialista”, conglomerado de distintas organizaciones sociales y políticas, por otro, la movilización de sectores

integrantes del Frente Amplio (pero no del Frente Amplio como colectivo) y otras organizaciones sociales. El común denominador de ambos fue obviamente rechazar al visitante, pero mientras en el primer caso se criticó al gobierno por la invitación y su postura de creciente acercamiento a Estados Unidos (“Bush, el gobierno te invita, el pueblo te repudia”, decía uno de los carteles), en el segundo, la acción de protesta excluía toda crítica al gobierno uruguayo y su presidente.

Corresponde agregar que las escisiones volvieron a registrarse con los actos por el Día de los trabajadores, desde el primero de mayo del 2007 en adelante. Además del clásico acto anual convocado por la central de trabajadores PIT-CNT, existió un poco antes y el mismo día un acto alternativo convocado por la corriente sindical “Tendencia Clasista y Combativa” en el que se realizaron fuertes críticas al gobierno pero también a la “burocracia sindical”. Es claro que los nuevos ingresados o marginales en el campo tienen estrategias de subversión orientadas a una acumulación de capital específico que suponga una redefinición más o menos revolucionaria de los principios de producción y de apreciación de los “productos” de ese espacio. En este caso, fue significativo que algunos participaron entonces de ambas concentraciones.

El caso uruguayo puede ser útil entonces para observar por un lado diversas expresiones de demandas de derechos en un juego de presión - negociación con el gobierno caracterizado como progresista, pero por otro lado, como también aparecen distintas formas más simbólicamente consistentes en términos de rechazo a los mismos en las que comienza a expresarse el malestar de quienes perciben una continuación “pro-imperialista” o siguiendo “la lógica de los gobiernos neoliberales”, entre otras expresiones que suelen emplearse.

Aquí se abren pues, varias y nuevas interrogantes claves que deben examinarse generando conexiones analíticas entre campo popular, fuerza política y gobierno y estableciendo algunas comparaciones con la región. No puede subestimarse la pregunta sobre que puede ocurrir con la canalización del malestar social, particularmente en sectores que crecientemente perciben que las perspectivas de transformación social se han licuado o frenado. En este escenario, no se descartan que surjan o aumenten su potencial otras expresiones sociales que escapan a las lógicas centrales del campo popular y que hoy aparecen como marginales.

6. Reflexiones finales

Más allá de formas de adaptación de agentes del campo popular a los nuevos contextos o incluso de formas de “resignación”, es decir la construcción de un sentido práctico de imposibilidad de otras alternativas reales, las luchas pueden presentarse sobre dos posibilidades. Por un lado, los movimientos sociales más cercanos a los gobiernos (por decirlo rápidamente), recuperan una relación de mayor autonomía respecto al mismo –con escenario de crisis global- e incluso respecto a la fuerza política. Por otro lado, pueden adquirir mayor protagonismo otros movimientos u otras formas de movilización que cuestionen profundamente el consenso instalado.

Para proyectar este escenario con estas últimas características, puede considerarse el caso de Chile, el país del cono sur donde, como se dijo, más cristalizó el consenso liberal. Aún en esa sociedad, hay indicadores de rupturas. Una inflexión puede establecerse con la masiva y contundente movilización que promovieron los estudiantes chilenos y que transitó durante dos meses -a partir de la agitación que comenzó el 16 de abril del 2006- por carriles diferentes de la política tradicional. Es decir, la movilización de los 800 mil estudiantes de secundaria con el apoyo de 100 mil estudiantes universitarios que colocó en la agenda el derecho a una educación pública de calidad (menos mercantilizada), transcurrió fuera del consenso bipartidista.

Si bien el proceso con los estudiantes luego retomó canales más institucionales, no fueron pocos los análisis que vieron en esas experiencias sociales una proyección de tiempos de inestabilidad y de incertidumbre y que era previsible que otras demandas latentes en la sociedad encontraran un nuevo tiempo de expresión. De hecho, en el 2007 se produjeron manifestaciones importantes en torno al derecho a un transporte de calidad en Santiago, cuando abruptamente, desde la ruptura de la cotidianeidad, se pudo visualizar la inexistencia de ese derecho con la puesta en funcionamiento del llamado "Transantiago". La consecuencia política de la movilización fue el recambio de parte del elenco ministerial. También se han comenzado a visualizar movilizaciones sindicales y un mayor protagonismo de las demandas mapuches (aislados e invisibilizados).

Considerando ahora los cuatro países, igualmente debe señalarse que este es un escenario esencialmente imprevisible en cuanto a derivaciones. ¿Por ejemplo criminalización de la protesta ante el surgimiento de un nuevo ciclo de luchas sociales?. No puede descartarse y han existido algunas evidencias que pueden proyectarse en tal sentido como escenario. El MST

en el Estado de Río Grande del Sur (bajo una gestión ubicada en la derecha del campo político) es un ejemplo.

Obsérvese entonces nuevamente los desafíos simbólicos del campo popular. Los desafíos de parte de sus agentes de actuar, construir y disputar la subjetividad colectiva ante la capacidad del gobierno de domesticar las expectativas sociales, la capacidad de los partidos situados a la derecha del campo de disputar espacios, los recursos de agentes del campo económico para que intereses sectoriales terminen en estrategias que involucren a toda la sociedad y los agentes dominantes en el campo de la comunicación de conservar o acrecentar su poder tendiendo a reproducir el sentido común instalado.

La disputa de sentidos implica un replanteamiento permanente de tensiones. Por ejemplo, entre construir el tema de derechos humanos como punto final y "reconciliación" o como lucha por la memoria y la justicia; entre construir la ciudadanía como inclusión al consumo o como construcción colectiva de derechos; entre pensar la participación como concesión que permite encauzar el descontento incluyéndola en los márgenes del campo político o como participación real en toma de decisiones, y así con otras dimensiones. En todos estos casos, para las fuerzas y organizaciones que integran el campo popular se trata de construir formas subjetivas de apropiarse de la realidad y como se señaló, quitar la autoreferencialidad del campo político.

Un último ejemplo en tal sentido. En el caso uruguayo, desde un comienzo de desencuentros que se plasmó en el acto de lanzamiento de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad el 21 de noviembre del 2006, al cual no asistió la mayor parte de la bancada oficialista¹⁷², se llega hoy a la aceptación de buena parte del Frente Amplio de respaldar la recolección de firmas para una consulta popular para la derogación de la ley de caducidad (no obstante, es cierto que contaba con los votos en el parlamento para derogarla directamente). No pueden entenderse estos cambios de posiciones sin un campo popular que fue construyendo un sentido alternativo y al mismo tiempo "obligando" a agentes del campo político a adoptar posiciones más riesgosas para sus intereses que las iniciales.

¹⁷² Guillermo Waksman: "Contradicciones en torno a un mamarracho jurídico", Montevideo, Brecha, 01.12.06. Por otra parte, recuérdese que la llamada "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" (conocida como ley de "impunidad" en el campo popular) bloqueo desde su consagración la investigación sobre violaciones de derechos humanos en Uruguay durante la dictadura y la actuación de la justicia contra militares y civiles responsables.

Pensar estos elementos transversalmente, más allá de fronteras y especificidades no es menor. En la tensión observada, más allá de fronteras nacionales, entre una democracia con recambio electoral pero vaciada de contenidos y una democracia real con ciudadanía reflexiva, lo que está en juego es la potencialidad del campo popular para buscar influir promoviendo lo segundo.

Referências bibliográficas

BOURDIEU, Pierre. *Las estructuras sociales de la economía*. Buenos Aires, editorial Manantial, 2001.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil Ltda., 2005 (1989).

BOURDIEU, Pierre. *El Sentido Práctico*. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2007 (1980).

FALERO, Alfredo. Desafíos teórico - metodológicos para el estudio de los movimientos sociales en América Latina en libro colectivo *América Latina una y diversa: teorías y métodos para su análisis*, Cairo y de Sierra, comps., San José, Costa Rica, Editorial Alma Mater, 2008, páginas 225 a 247.

FALERO, Alfredo. Las batallas por la subjetividad. Construcción de derechos, luchas sociales y dominación simbólica en Uruguay. Montevideo, UDELAR – CSIC / Fanelcor, 2008 (b), 268 páginas.

FILGUEIRAS, Luiz. O neoliberalismo no Brasil: estructura, dinâmica e ajuste do modelo económico en *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Eduardo Basualdo y Enrique Arceo (comps.), Buenos Aires, CLACSO, 2006.

FLORES ANDRADE, Anselmo. Empresarios e izquierda: dos mundos que se acercan, en *Revista Nueva Sociedad* Nº 202, Caracas, Marzo / Abril 2006.

GRAMSCI, Antonio. *La política y el Estado moderno*, Buenos Aires, Ed. Planeta-Agostini 1985 (1^a edición italiano: 1971).

MELUCCI, Alberto. *Vivencia y convivencia*. Teoría social para una era de la información, Madrid, Editorial Trotta S.A., 2001.

O'CONNOR, James. *Crisis de acumulación*, Barcelona, Ediciones Península, 1987.

REVILLA BLANCO, Marisa. El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido, artículo contenido en *Zona Abierta* Nº 69, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1994.

SENNETT, R. La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2000.

SVAMPA, Maristella. Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo, artículo contenido en *REVISTA OSAL* (Observatorio Social de América Latina) n. 24 – CLACSO, Buenos Aires, Octubre 2008.